



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, tres de mayo de dos mil veintitrés

S21-154

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN SENTENCIA
Demandante: **DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ**
Demandada: **PROTECCIÓN S.A.**
Llamado en garantía: **COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.**
Litis consortes: JUAN GUILLERMO GÓMEZ MÁRQUEZ
ERIKÁ MARÍA GÓMEZ MÁRQUEZ
ALEXANDER GÓMEZ SALAZAR representado por su madre Ruby Alexa Salazar Delgado
Radicado No.: 05001-31-05-**021-2014-00491-01**
Tema: pensión sobrevivientes – intereses moratorios
Decisión: **MODIFICA**
LINK: [21-154 \(021-2014-00491\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, la AFP y la aseguradora llamada en garantía, dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 13** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante el reconocimiento de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el fallecimiento de su cónyuge Guillermo León Gómez Ospina, en un 100% y desde el día 15 de

marzo de 2009, así como los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que el 3 de diciembre de 1984 contrajo matrimonio católico con el señor Guillermo León Gómez Ospina, fecha desde la cual conformaron un hogar, unión de la cual procrearon cuatro hijos: JERSON ANDRÉS, JOSE DANIEL, MILTON LEONARDO y RUBEN DARIO GÓMEZ CASTAÑEDA, respectivamente, quienes en la actualidad son mayores de edad.
- ✓ Que el día 15 de marzo de 2009 falleció su cónyuge en la ciudad de Medellín de manera natural, momento para el cual se encontraba afiliado a Protección S.A. y al día con el pago de los aportes, contando con las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores, de las cuales 26 lo fueron en el último año, incluso reunía el requisito de fidelidad.
- ✓ Que 25 de marzo de 2014 Protección resolvió negativamente la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, aduciendo que ella no convivió con el causante los últimos 5 años continuos.
- ✓ Que el causante al momento del deceso era padre de cuatro hijos, los cuales vivían bajo el mismo techo, siendo éste quien los sostenía económicamente.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió PROTECCIÓN S.A. el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que la mayoría eran ciertos excepto los relacionados con la calidad de beneficiaria de la demandante, dado que NO satisfacía el requisito de convivencia con el afiliado de 5 años anteriores al fallecimiento, toda vez que NO hacían vida marital en común dado que aquel vivía en casa de su madre, precisando que sólo los hijos del causante accedieron a la pensión aquí pretendida, aunque dejó en reserva el 50%. Añade que tras el deceso, quien se presentó a reclamar fue la señora LUZ MARY MARQUEZ MARIN en representación de los menores JUAN GUILLERMO y ERIKA MARÍA GÓMEZ MARQUEZ, además de la señora RUBY ALEXA SALAZAR SALGADO por otro hijo menor, y sólo transcurridos cuatro años, la aquí demandante elevó la correspondiente petición en nombre propio y de tres de sus cuatro hijos.

Por su parte, la llamada en garantía COMPAÑÍA SEGUROS BÓLIVAR S.A., se pronunció con argumentos similares a los expuestos por el fondo, recalcando que pese a la vigencia del vínculo matrimonial y conforme las declaraciones extra-juicio que reseña, el causante vivía con su madre Ana Eva Ospina Gallego en el Barrio Manrique. Agregó que las obligaciones derivadas de la póliza de seguro colectivo, mediante la cual amparó a los afiliados de la administradora, relacionados con el pago de la suma adicional para financiar la pensión de sobrevivientes, NO así otros conceptos, estaban sujetas al cumplimiento de los requisitos de ley por parte de los beneficiarios, calidad que NO ostentaba la demandante toda vez que la convivencia había cesado 8 meses antes de la muerte del causante.

Valga aclarar en este punto que ERIKA MARÍA GÓMEZ MARQUEZ fue notificada personalmente pero ninguna otra actuación realizó (fl. 158). Los intereses de JUAN GUILLERMO GÓMEZ MÁRQUEZ fueron representados a través de curadora ad litem, último que compareció a la audiencia de juzgamiento.

Finalmente se pronunció la señora RUBY ALEXA SALAZAR SALGADO en representación de su hijo Alexander Gómez Salazar, quien coadyuvó la súplica del demandante, aceptando como ciertos todos los hechos.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 14 abril del 2021, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a Protección S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a la demandante por la muerte de su cónyuge GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA, desde el día 8 de julio de 2010, al haber prescrito las causadas con antelación, en cuantía equivalente al 50% de un (1) SMLMV, incluyendo 2 mesadas adicionales por año, con derecho a acrecer, cuantificando un retroactivo hasta el 31 de marzo de 2021 ascendía a \$51.161.996. Igualmente accedió a la indexación de las mesadas reconocidas y las causadas a futuro. Autorizó el descuento del porcentaje en salud.

De otro lado, ordenó a Protección S.A. REAJUSTAR la prestación en favor del menor ALEXÁNDER GÓMEZ SALAZAR, a un 50% de un (1) SMLMV, a partir del día siguiente a la fecha en que se dejó de reconocer la prestación a los demás hijos del causante, precisando que NO había operado el fenómeno prescriptivo, teniendo en cuenta que se trataba de un menor de edad, sumas que también debían ser indexadas al momento del pago.

Condenó en costas a la AFP fijando como agencias en derecho la suma de \$3.634.104 a favor de la señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ.

Por último, CONDENÓ a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. a completar ante la AFP el capital necesario para financiar la pensión reconocida en favor de los beneficiarios del causante, en los términos de la póliza de garantía.

Dentro del término concedido por la ley, la demandante, la AFP y la aseguradora llamada en garantía, interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Realizó algunas precisiones en cuanto al concepto de convivencia, aclarando que jurisprudencialmente, la prespecialidad y permanencia podía adquirir otros matices en casos de fuerza mayor, salud, trabajo, imperativos legales o económicos, que implicaban una separación, NO así la cesación de la comunidad de vida, el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual que caracterizaba a una pareja. Bajo este contexto, le restó relevancia a la separación física de la demandante y su cónyuge durante los últimos meses de vida de aquel, pues la misma estaba completamente justificada ya que, fue en razón al deterioro de su salud, resultó conveniente llevarlo a la casa de su madre en aras de proporcionarle mayor acompañamiento y atención, ya que la demandante debía salir a trabajar para obtener el sustento económico de su hogar. Y en todo caso a la esposa le bastaba con acreditar 5 años de convivencia en cualquier tiempo, lo que con suficiencia se evidenciaba en la investigación administrativa.

Igualmente señaló que en las circunstancias descritas, resultaban creíbles los dichos de Luz Mary Márquez, una de las madres de los hijos del causante, respecto de los cuidados que prodigaba la accionante a su esposo en su lecho de muerte, pues fueron sus propios hijos quienes lo percibieron de manera directa, incluso a lo largo de los años, conocimiento personal que también devenía de tener dos hijos en común.

Negó los intereses moratorios deprecados al señalar que en el presente caso NO se podía hablar de una negación injustificada o arbitraria, dado que se estaba accediendo a la prestación en

virtud de una interpretación jurisprudencial, pues de una aplicación literal de la ley, habría de negarse la prestación. Por ello ordenó la indexación de la condena.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. PARTE ACTORA

Solicita el reconocimiento de los intereses moratorios contemplados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Considera que los argumentos del juez al resolver, son los mismos con los cuales se debían conceder dichos intereses pues resultaba contradictorio afirmar que no mediaba una negativa arbitraria de la administradora, pero simultáneamente señalar que a través de la investigación administrativa se lograba establecer el derecho a favor de la cónyuge superviviente, quien si demostró la convivencia con el causante desde la fecha del vínculo matrimonial hasta el momento del deceso.

Cosa diferente es que en los últimos días se vieron obligados a separarse físicamente por la condición de salud que presentaba el afiliado, cuya génesis no era la ruptura de la unidad familiar, de ahí que la negativa de la entidad tendría que entenderse como injustificada.

2.2.2. APELACIÓN PROTECCIÓN S.A.

Se aparte de la interpretación que le dio el despacho a la norma, aduciendo que debía tenerse en cuenta el espíritu de la ley, centrado en la protección de la familia, entendida como esos lazos que propugnan por un acompañamiento espiritual, económico y soporte mutuo, lo que en el presente caso NO se había logrado acreditar pues durante el tiempo de convalecencia no demostró que estuviese acompañándolo brindándole ese apoyo, por el contrario, lo que se probó fue que dicho cuidado lo brindó Eva, la madre de aquel.

Que igualmente difiere del análisis probatorio, de manera concreta sobre lo declarado por la testigo LUZ MARY dado que, al inicio, cuando el juez le preguntó si tenía conocimiento del por qué estaba presente en la audiencia, espontáneamente manifestó que para declarar a favor de la demandante, y al indagarla sobre ello, trató de cambiar su versión diciendo que realmente iba a manifestar era lo que ella conocía sobre el matrimonio de la señora DIONE y el causante, porque

éste último se lo había manifestado, pero posteriormente varió su versión al señalar que su conocimiento databa de una situación particular en la que la demandante los persiguió cuando ellos dos estaban saliendo. Con base en ello aduce que la declaración no era espontánea, además, tampoco tenía conocimiento directo de la supuesta convivencia de la accionante con el señor Guillermo, de la cual se enteró de manera fortuita, aunado a que NO eran amigas, por lo que desconocía la continuidad de la relación, incluso la ponente para ese momento aduce que estaba embarazada y que aun así la demandante seguía en dicha relación. Pero en todo caso, la declarante aceptaba que no había tenido conocimiento de *primera mano* y lo que sabía era por las visitas que eventualmente hacía su hijo a la casa del padre, siendo un testigo de oídas, o por lo percibido en una sola ocasión cuando visitó al hoy causante. Fuera de estos dos eventos no tenía como saber que Dione continuó visitando al afiliado.

De ahí que, si a voces del despacho, la esposa no requería acreditar un tiempo mínimo de convivencia al tratarse del fallecimiento de un afiliado, sólo que la misma perviviera al momento de la muerte, pues habría de concluirse que era inexistente el derecho, sin que hubiese alguna circunstancia de interrupción ya que nada justificaba que ante una enfermedad, así fuera catastrófica o grave, no fuese la cónyuge la que estuviera al cuidado del mismo, y por el contrario, en cuanto éste se enfermó gravemente, permitió que se fuera donde su madre y ésta asumiera el rol. Tampoco justificaba el actuar de la demandante que afirmase que requería trabajar, pues ello lo hacía con anterioridad, adicional sus hijos podían brindarle esos cuidados, tornándose incomprensible el cambio de domicilio.

En dichos términos solicita se revoque la condena, así como la INDEXACIÓN de las mesadas retroactivas dado que NO comportó una pretensión, y ello debía ser rogado, habiéndose excluido este punto del litigio a dirimir, aunado a que el remedio a la pérdida adquisitiva era que las mesadas pensionales se actualizaban año a año con el IPC, por lo que no habría lugar a este remedio por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

2.2.3. APELACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.

Tras mostrar conformidad con lo expuesto por la AFP, señaló que NO resultaban claros los *motivos de la no convivencia* entre la demandante y el causante, puesto que no se había demostrado en el proceso la existencia de ese acuerdo previo entre los dos, sólo y exclusivamente en razón de su enfermedad, para que la madre del afiliado lo cuidara. Insiste que en el proceso NO hay una prueba inobjetable que indique que esa fue la razón de la no

convivencia, pues lo cotidiano, lo normal, cuando enferma el cónyuge, es que lo cuide la familia más cercana, que para el caso sería la esposa y los hijos.

Le resta credibilidad a la justificante de la actora, respecto de que se le imposibilitaba cuidarlo porque debía trabajar para sostener el hogar, ya que, conforme lo expuesto por una de las testigos, para aquella época sus tres hijos mayores, o por lo menos dos de ellos, ya trabajaban y le ayudaban económicamente. Y en todo caso, esta siempre laboró, por lo que se desconocía la real causa de separación, contexto en el que, si la pensión buscaba proteger el núcleo familiar, el mismo ya era inexistente para el momento de los hechos, NO había una ayuda asistencial entre los cónyuges, por lo menos desde ocho meses atrás, incumpléndose así con la finalidad de la prestación, debiéndose negar el derecho porque NO hacía convivencia con el causante, independientemente del tiempo que exigiera la norma, dígase 5 años o al momento de la muerte.

2.3. ALEGATOS

Únicamente se pronunció la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. Expresamente indicó que:

La prueba obrante en el expediente da cuenta que el afiliado GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA contrajo nupcias por el rito católico con la señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ el día 3 de diciembre del año 1984, que dentro del matrimonio procrearon a JERSON ANDRÉS GÓMEZ CASTAÑEDA, JOSÉ DANIEL GÓMEZ CASTAÑEDA, MILTON LEONARDO GÓMEZ CASTAÑEDA y RUBÉN DARÍO GÓMEZ CASTAÑEDA, igualmente la prueba obrante en el expediente da cuenta que por fuera del matrimonio, el señor, GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA procreó a JUAN GUILLERMO GÓMEZ MÁRQUEZ, ERIKA MARÍA GÓMEZ MÁRQUEZ y ALEXANDR GÓMEZ SALAZAR, también la prueba obrante en el expediente da cuenta que el señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA falleció el día 15 de marzo de 2009; pacíficamente se admitió en el proceso por parte de PROTECCIÓN S. A. y por parte de la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. que el causante, señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA en vida dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes toda vez que en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento tenía cotizadas al menos cincuenta (50) semanas al Sistema General de Pensiones.

En estos términos es absolutamente claro que siguiendo los lineamientos del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2013 la pensión de sobrevivientes corresponde en un 50% a la cónyuge supérstite, la demandante, señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ toda vez que la señora RUBY ALEXA SALAZAR SALGADO madre de ALEXANDER GÓMEZ SALAZAR indicó al despacho no tener interés en una disputa sobre la porción pensional correspondiente a la cónyuge del causante; y el otro cincuenta (50%) por ciento para los hijos del causante hasta que cumplan dieciocho (18) años o hasta que cumplan los veinticinco (25) años si acreditan estudio regular y que una vez los hijos pierdan el derecho pensional por alcanzar la mayoría de edad o los veinticinco (25) años en el caso de estudio regular, momento en que la mesada pensional acrecería en favor de la cónyuge supérstite.

Pero resulta que en el proceso también se admitió pacíficamente que desde ocho (8) meses antes del 15 de marzo de 2009, fecha del fallecimiento del señor GUILLERMO

LEÓN GÓMEZ OSPINA, el causante se separó de hecho de su cónyuge DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ y se fue a vivir con su señora madre ANA EVA OSPINA GALLEGU una vez le fue diagnosticado el cáncer de piel.

Desde el momento de la separación, mediados del año 2008, entre cónyuges cesó la vida en pareja, se rompió la unidad familiar, los sentimientos de ayuda mutua, asistencia y cooperación entre cónyuges dejaron de existir, no se compartía techo y mesa y menos existían relaciones maritales, elementos todos que son el fundamento filosófico de la institución pensional de sobrevivientes; proteger el núcleo familiar y asegurar en todo o en parte los ingresos de la cabeza de hogar fallecido.

Para el caso que nos ocupa es claro que para la fecha de la separación de hecho entre los cónyuges, los hijos del matrimonio: JERSON ANDRÉS GÓMEZ CASTAÑEDA, JOSÉ DANIEL GÓMEZ CASTAÑEDA, MILTON LEONARDO GÓMEZ CASTAÑEDA y RUBÉN DARÍO GÓMEZ CASTAÑEDA eran ya mayores de dieciocho (18) años y trabajaban o por lo menos ya no estudiaban regularmente y que la señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ trabajó desde siempre quedando desvirtuado que ella solo empezó a trabajar para sostener la economía del hogar cuando el señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA enfermó.

Lo normal y lo cotidiano es que si la cabeza de hogar enferma y se enfrenta a una situación médica sea su propio núcleo familiar quien lo asista y lo acompañe, contrario a lo que se visualiza en este caso en donde la cónyuge demandante, señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ además de no asistir en su lecho de enfermo al señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA tenía su residencia en otro lugar y se dedicaba al trabajo; y es que admitir que por el solo hecho que haya existido una relación en virtud de un matrimonio (rito católico) o de una unión marital de hecho se tenga la vocación de beneficiaria o beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge o compañera permanente cuando se da una separación de hecho, sería también admitir que en la pensión de sobrevivientes tiene vocación de beneficiario o beneficiaria cualquier persona que haya tenido con el causante una relación formal de convivencia no vigente, cualquiera haya sido su duración y en cualquier época anterior a su fallecimiento.

Con el debido respeto consideramos que el hecho que determina si existe o no vocación de beneficiario o beneficiaria entre cónyuges o compañeros permanentes es que para el momento del fallecimiento de uno de ellos exista unidad o grupo familiar, que existan lazos y sentimientos de ayuda mutua, asistencia y cooperación entre cónyuges o compañeros permanentes y que no se encuentren separados que es lo que se infiere ocurrió entre la demandante, señora, DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ y el señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA una vez le fue diagnosticado el cáncer, no se trata de simples separaciones temporales fruto de peleas por celos y desavenencias de pareja como ha querido hacerlo ver la parte demandante; obsérvese que la última separación se dio precisamente ocho (8) meses antes del fallecimiento del señor GÓMEZ OSPINA, ella misma afirma al diligenciar el formulario propuesto por la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. GERENCIA DE PENSIONES documento CUESTIONARIO PARA CÓNYUGE (O) O COMPAÑERA (O) RECLAMANTE DE PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA que se dio cuenta de la existencia del menor ALEXANDER GÓMEZ SALAZAR cuando a su lecho de enfermo lo fue a visitar la señora RUBY madre de su hijo menor ALEXANDER en el mes de septiembre de 2008, lo que claramente evidencia que esa separación no era temporal ni por motivos de celos o desavenencias de pareja, esa separación fue definitiva y desde ocho (8) meses atrás ya eran inexistentes la vida en pareja, se rompió la unidad familiar, los sentimientos de ayuda mutua, asistencia y cooperación entre cónyuges dejaron de existir, no se compartía techo y mesa y menos existían relaciones maritales, elementos todos que, insistimos, son el fundamento filosófico de la institución pensional de sobrevivientes.

Por lo expuesto, consideramos, señores Magistrados, contrario a lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, que la demandante, señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ÁLVAREZ, en este caso, no tiene vocación de beneficiaria en los términos del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2013 toda vez que para el 15 de marzo de 2009 fecha de fallecimiento de su cónyuge GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA ya se encontraba separada de hecho y eran inexistentes la vida en pareja, se rompió la unidad familiar, los sentimientos de

ayuda mutua, asistencia y cooperación entre cónyuges dejaron de existir, no se compartía techo y mesa y menos existían relaciones maritales, elementos todos que, insistimos, son el fundamento filosófico de la institución pensional de sobrevivientes.

En dichos términos solicita se REVOQUE la sentencia y se desestimen las pretensiones de la demanda.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si la demandante acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA, estableciendo si le basta con demostrar cinco años de convivencia en cualquier tiempo, o si dicha convivencia debe pervivir al momento del deceso, evento en el que también se examinará la incidencia de la separación de la pareja y si ello fue por causas del estado de salud del causante.

En caso de confirmarse la sentencia en dicho aspecto, se establecerá si es procedente ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios deprecados, o en su defecto, si es dable acceder a la indexación de la condena.

4. CONSIDERACIONES

No comporta objeto de discusión que el afiliado fallecido, señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA, satisfizo los requisitos para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de quien acreditase la calidad de beneficiario. Incluso, en su momento, los hijos del causante disfrutaron de dicha prestación, reconocida en el trámite administrativo.

Aquí la discusión estriba es en la intelección que debe darse al art. 47 de la Ley 100 de 1993 que prevé como beneficiaria en forma vitalicia a la cónyuge que tenga 30 años o más. Incluso el a quo reconoce la falta de claridad en su redacción. Y es que el primer inciso expresamente indica que la esposa *deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte*. Este es el apartado cuya aplicación pretenden las entidades recurrentes. Posteriormente el artículo refiere que cuando NO existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, *la compañera o compañero permanente podrá reclamar un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya*

sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

No obstante, los vacíos generados o las disímiles interpretaciones que se desprendían de su lectura, fueron asuntos resueltos, concretados, por denominarlo de alguna manera, a través de la jurisprudencia, tanto la emanada de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia.

Consúltese para el efecto los razonamientos plasmados en la sentencia C-515 de 2019, cuando tras analizar la amplia potestad de configuración del legislador en materia pensional, reconoció que:

“(…) es claro que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según modificado, creó una **regla general al momento de establecer los requisitos para los cónyuges** o compañeros permanentes (literal a) e incisos 1, 2 y parte inicial del 3 del literal b)), **que da prelación a la convivencia con el causante por más de 5 años antes de su fallecimiento**, por encima de cualquier vínculo formal. Sin embargo, el legislador, decidió a su vez crear en el aparte demandado (parte final del inciso 3 del literal b)), una **excepción** a dicha regla, determinando que el derecho a la pensión de sobrevivientes se conservaría en una cuota parte a los cónyuges que en algún momento hubiesen convivido por más de 5 años, pero que esté **separados de hecho (sin convivencia al momento de la muerte del causante)**, pero que hubiesen decidido mantener los **efectos patrimoniales del matrimonio, esto es, la sociedad conyugal vigente**. Por lo cual, en esta excepción, objeto de la presente demanda, **el legislador optó por desplazar el criterio de convivencia, por el de vigencia o no de la sociedad conyugal**. (Resaltos de la sala)

En el mismo sentido, en la Sala de Casación Laboral, actualmente pervive un criterio pacífico según el cual la cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, separada de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años **en cualquier tiempo**, incluso, estipuló que ni siquiera es necesario probar que posteriormente conservó un vínculo afectivo. Señala que tal posibilidad la contempló el literal b), al regular, entre otros, el caso del cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial vigente, lo que implicaba que no había cohabitación para el deceso. Véase SL633-2023, SL638-2023, SL557-2023, SL4093-2022 y SL2767-2022, sólo por mencionar algunas, última en la que el M.P. Gerardo Botero Zuluaga, también recordó que el requisito de la convivencia real y efectiva como condicionante del surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común, reconociendo que las complicaciones de salud que ameritan una separación física, no rompen necesariamente el vínculo afectivo, ni la vocación de convivencia que se pueda predicar de quienes deciden consolidar su unión de pareja.

Comporta este el norte de la discusión, donde precisamente, según se desprende de la investigación administrativa, se le reprocha a la señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ una separación durante los últimos 8 meses de vida del causante, concretamente entre septiembre de 2008 y 15 de marzo de 2009, fecha del deceso, pese a que desde el 3 de diciembre de 1984 ostentaba la calidad de cónyuge del señor GUILLERMO LEÓN GÓMEZ OSPINA, con vínculo matrimonial vigente según se verifica en el Registro Civil de Matrimonio (fl. 16).

En otras palabras, se acepta una convivencia de más de 23 años pero se niega la prestación por NO cohabitar al momento del deceso, contexto bajo el cual, bastaría con acudir al criterio jurisprudencial antes aludido para avizorar el yerro de la administradora.

Comencemos por los hallazgos de la investigación administrativa, conformada por múltiples formatos diligenciados, además de la recepción de algunas declaraciones por parte del ente investigador.

Allí la solicitante aclaró que por motivo de la enfermedad que padecía su cónyuge, cáncer de piel, *buscaron su bienestar en cuanto a cuidados médicos*, explicando de esta forma porque el causante habitaba en otra residencia cuando falleció, concretamente en la de su madre donde permanecía desde septiembre de 2008. La señora Dione Elizabeth aceptó otras interrupciones de la convivencia, máximo de un mes, pero de años atrás, debido a discusiones familiares por infidelidades de las cuales el causante tuvo tres hijos extramatrimoniales, con dos mujeres, una de las cuales conoció cuando esta lo visitó en el *lecho de la enfermedad*, aclarando que dichas relaciones sentimentales NUNCA trascendieron a una convivencia.

En la investigación en mención, se recibieron las declaraciones de la señora ANA EVA OSPINA GALLEG0 y el señor JORGE IVÁN GÓMEZ OSPINA (fl. 139), quienes en su condición de madre y hermano del causante, reiteraron los dichos de la reclamante. Son conocedores del vínculo matrimonial de la pareja, su convivencia, así como los hijos procreados frutos de dicha unión. Aceptan la existencia de otras dos relaciones sentimentales del causante, de años atrás, pero no de convivencia, en los cuales aquel tuvo tres hijos. Igualmente reconocen la aludida separación por un término de 8 meses previo a la fecha de la muerte del causante, debido a su condición de salud.

Similar es la versión de las señoras GLORIA AMPARO SANCHEZ RESTREPO y EDITH SOLANDY GÓMEZ PABÓN (fl.141), quienes circunscriben el conocimiento de sus dichos a su

calidad de vecinas, afirmando que hasta 8 meses antes del fallecimiento, la demandante y el afiliado fallecido, compartían techo, lecho y mesa, además tenían una sociedad conyugal vigente.

Desconoce la Sala la razón por la cual dichas versiones fueron calificadas como contradictorias por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. el 18 de marzo de 2014 (fl. 144), para negarse a completar el capital requerido para financiar la eventual prestación, indicándole a Protección que debía solicitarle a la reclamante iniciar el correspondiente proceso ante la jurisdicción ordinaria. Cosa diferente es que aquellas entidades entendiesen, bajo el tenor literal de la norma, que la convivencia debía acreditarse incluso al momento del deceso y ello parece comportar la verdadera génesis de la negativa, ya que ninguna versión contrapuesta se avizora en el trámite de la reclamación, donde incluso se incorporó la declaración extra-juicio rendida el 20 de marzo de 2014 por la señora Luz Mary Márquez Marín, madre de dos de los hijos del causante (Juan Guillermo de 19 años para esa data y Erika María de 23, producto de otra relación pero reconocida por el fallecido), la que, en síntesis, ninguna oposición manifestó al reclamo de la demandante, pese a que con ello despojaba a sus propios hijos de un importante porcentaje de la prestación de la cual alguna vez fueron beneficiarios.

Estas fueron sus palabras (fl. 64):

ACTA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN EXTRAPROCESO

SENTIDO DE LA DECLARACIÓN EXTRAPROCESO:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que los hechos que expongo son personales y de mi conocimiento.

La presente declaración la hago de forma libre y espontánea de acuerdo a lo previsto en el decreto 019 de 2012, artículo 7, y manifiesto lo siguiente:

PRIMERO: Conocí al señor GUILLERMO LEON GÓMEZ OSPINA, quien se identificaba con la CC. Nro. 71.680.604 De Medellín y falleció el día 15 de Marzo de 2009, puesto que sostuve una relación sentimental, más no de convivencia con el citado señor, de cuya unión, procreamos un (1) hijo, de nombre JUAN GUILLERMO GÓMEZ MARQUEZ, quien cuenta actualmente, con 19 años de edad y reconoció a una hija, procreada por mí, fruto de otra relación sentimental, a quien llamaron ERIKA MARÍA GÓMEZ MARQUEZ, quien cuenta actualmente con 23 años de edad. Los citados jóvenes en su oportunidad, recibieron los beneficios pensionales, por el deceso de su señor padre.

SEGUNDO: Me consta que el señor GUILLERMO LEON GÓMEZ OSPINA, para la fecha de fallecimiento, era de estado civil casado, con la señora DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ, desde el día 03 de Diciembre de 1984, sociedad conyugal que se encontraba vigente, para la fecha del fallecimiento, de cuya unión tuvieron cuatro (4) hijos de nombres: JERSON ANDRÉS GÓMEZ CASTAÑEDA, de 28 años de edad, JOSÉ DANIEL GÓMEZ CASTAÑEDA, de 26 años de edad, MILTON LEONARDO GÓMEZ CASTAÑEDA, de 24 años de edad y RUBEN DARIO GÓMEZ CASTAÑEDA, quien cuenta con 21 años de edad.

TERCERO: Me consta que para la fecha del deceso, GUILLERMO LEON GÓMEZ OSPINA, por motivos de salud se había ido a vivir, donde su señora madre ANA EVA OSPINA GALLEG0, donde permaneció, los últimos ocho (8) meses, anteriores a su fallecimiento, sin embargo, sus hijos y su esposa DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ, siempre estuvieron pendientes de él, lo visitaban y velaron por sus cuidados, durante la enfermedad terminal que padecía.

CUARTO: Legalmente tuve conocimiento, que el señor GUILLERMO LEON GÓMEZ OSPINA, sostuvo otra relación sentimental con la señora RUBY SALAZAR, con quien tuvieron un hijo de nombre: ALEXANDER GÓMEZ SALAZAR, quien a la fecha es menor de edad y fue legalmente reconocido por el hoy fallecido.

LEA BIEN SU DECLARACIÓN ANTES DE FIRMARLA, DESPUÉS DE FIRMADA NO SE ADMITEN RECLAMOS

Así las cosas, se reitera, la sola investigación resulta suficientemente ilustrativa para radicar en cabeza de la cónyuge del causante, el derecho a percibir de la pensión de sobrevivientes reclamada.

Al margen de lo expuesto, y en atención a las datas en que la demandante y su esposo procrearon sus cuatro hijos, es dable entender, incluso acudiendo a las máximas de la experiencia, que durante más de 5 años de matrimonio existió una convivencia efectiva entre la pareja, pues si bien es sabido que engendrar un hijo no implica necesariamente que aquella exista, un número plural de ellos, en secuencia, apunta a lo contrario, pues al haberse procreado estos hijos de forma consecutiva, sumado además la diferencia de 2 o 3 años entre cada uno (fl.133), puede presumirse que la pareja estuvo conviviendo durante dicho lapso, acreditando así una convivencia superior a los 5 años, asunto que también fue corroborado por lo menos por una de las dos testigos traídas a juicio.

Descendamos en este punto a la prueba testimonial. Dicho medio estuvo conformado por la declaración de las señoras SANDRA YANETH BUSTAMENTE AGUIRRE, vecina de la familia durante 30 años en el barrio Manrique Oriental, y LUZ MARY MARQUEZ MARÍN, última traída por Protección S.A. con el fin de que reiterara lo expuesto años atrás en la declaración extrajuicio rendida en el trámite administrativo.

Ciertamente, y ello lo recalca la administradora en el recurso de alzada, la segunda de las ponentes NO resulta tan ilustrativa como la primera, a quien sí le consta directamente la convivencia de la pareja y las dinámicas de aquel hogar, precisamente en razón a esa vecindad por tantos años. La señora Sandra Bustamante afirma que habitaba a dos o tres casas de Dione, sobre la misma cera, en razón de ello los visitaba, se saludaban y se encontraban en la calle con regularidad, conocía los hijos que la pareja procreó, reseñó sus nombres, edades, a que se dedicaban, los roles de casa uno de los miembros de aquel hogar, acepta ser conocedora de las peleas de la pareja, y las separaciones momentáneas que de ello devenía especialmente en razón de las infidelidades, así como los hijos extramatrimoniales, aspecto que se rumoró en el barrio. Incluso en asuntos de menor relevancia fue conteste, espontánea, coherente, sus ideas se hilaban con facilidad y resultaban coherentes sus dichos contrastados en cualquier orden. Aceptó lo que no conocía o lo que no recordaba, sin entrar en suposiciones tendientes a favorecer a la accionante.

Igual a lo que ya reflejaba la investigación, la testigo reconoció la separación de la pareja durante los últimos meses de vida de aquel, quien se fue donde su madre, progenitora que habitaba a tres cuadras, pero con la finalidad de facilitar los cuidados del cáncer de piel que lo postró y desencadenó su muerte. Aseveró que, de siete días de la semana, tres o cuatro se encontraba a la demandante llegando de cuidar a su esposo, rol repartido entre los hijos, los hermanos, la madre y la cónyuge, última que no cesó sus actividades informales como vendedora de tarjetas

de celular para proveerse de recursos económicos, que para la Sala evidentemente resultan necesarios, especialmente en el contexto afrontado.

Entendible resulta la separación, al margen de lo que la misma hubiese durado, en la que realmente no cesó el vínculo de socorro y ayuda mutua que tanto echa de menos el apoderado de la aseguradora al cimentar el recurso de apelación. Natural es que el cuidado de ese ser requerido lo proporcionen sus familiares más cercanos, pero ello no implica que inexorablemente lo deban hacer, especialmente cuando se presentan circunstancias que amerita acudir a una ayuda externa para prodigar un cuidado permanente, que seguramente sí se le facilitó a la madre del causante. No por ello se desdibuja el derecho aquí reclamado.

Eventos como este han sido aceptados de antaño por la jurisprudencia, criterios o fragmentos que NO se torna necesario replicar, o auscultar en los raciocinios de la Corte Suprema de Justicia en aquellos eventos, pues aunque tal tesis NO fuese de recibo, a igual conclusión llegaría la Sala en torno a confirmar la decisión objeto del recurso de alzada, pues le bastaría a la cónyuge acreditar 5 años en cualquier tiempo, los cuales supera en demasía.

Bajo el contexto descrito, pierde relevancia cualquier inconsistencia que pudiese o no tener la versión Luz Mary Márquez, también habitante del barrio Manrique, reseñadas en la apelación por la apoderada de Protección, relacionadas con contradicciones, vacíos o cambios de versión, pues aunque hubiesen existido, NO es su ponencia en la que se basó la sentencia condenatoria. Y en todo caso, en gracia de discusión, el a quo indagó por aquellos aspectos, y la declarante explicó satisfactoriamente cualquier dubitativa, verbi gracia, afirmó que el causante fue quien le confesó la existencia de la esposa pero posteriormente comenta que en una ocasión la demandante los siguió y que por eso se enteró que existía, explicando que en la huida, por denominarlo de alguna manera, el señor Guillermo León la señaló como su cónyuge y ahí se enteró del engaño, demasiado tarde pues ya estaba embarazada y sólo aceptó la ayuda del progenitor de su hijo con quien, en sus palabras, sólo tenía encuentros casuales.

Por el contrario, nuevamente resultan muy dicientes sus palabras, cuando acepta que, por boca de sus hijos, quienes sí visitaban con regularidad a su padre enfermo, se enteró que Dione también lo cuidaba, incluso en la única visita que le hizo en su lecho de muerte, afirma que la demandante estaba presente, recuerda que le estaba dando comida.

Por último, encontramos el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, quien NO confesó nada diferente a lo ya dicho, pues nuevamente reconoció la problemática que suscitaba las

múltiples infidelidades, las separaciones momentáneas que ello desencadenó, y el hecho de que dejó de habitar con su esposo, bajo el mismo techo, sólo durante los últimos meses pero en razón de la enfermedad de su cónyuge, oportunidad en la que además precisó que el estudio de sus hijos se vio truncado por aquella época, dado que debían colaborar con el cuidado de su padre en la casa de la abuela paterna, lo que evidentemente se facilitaba en razón de la cercanía de ambos hogares.

En este sentido, bajo el supuesto que la separación entre la señora DIONE y el señor GUILLERMO hubiera sido por otros motivos, como conflictos de pareja o que el de cujus hubiera sostenido otra relación sentimental, o que simplemente hubiera cambiado de domicilio, no tendría la vocación de desacreditar a la cónyuge como beneficiaria, debido a que el vínculo matrimonial estaba vigente para el momento del fallecimiento del causante, correspondiéndole a la demandante acreditar 5 años de convivencia en cualquier tiempo, carga que en efecto satisfizo.

Negarle el derecho, como lo solicitan las entidades accionadas, contraría el sentido teleológico de la norma, que también busca salvaguardar los derechos y prerrogativas que adquieren los cónyuges al momento de conformar un hogar, el cual contribuyó en diversas maneras a la construcción y obtención de dicha prestación.

En atención a las consideraciones que preceden, se CONFIRMARÁ en este punto la decisión objeto del recurso de alzada.

Aclarado lo anterior, esta Magistratura procede a examinar el asunto relativo a la procedencia de los **INTERESES MORATORIOS**.

Sabido es que al tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales. Inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44.454 de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontrara justificada, bien porque tuviera respaldo normativo o porque su postura proviniera de

la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Antes de examinar el contenido de la misiva expedida a través de la cual Protección S.A. negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la peticionaria, es dable señalar que sólo en el año 2011, mediante sentencia 40055 del 29 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia comenzó a indicar que cuando existiera cónyuge separado de hecho con el vínculo conyugal vigente, pero no mediara compañero o compañera permanente, también el cónyuge tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando hubiere demostrado que convivió con el causante durante 5 años en cualquier tiempo. Tal posición se fue reiterando paulatinamente, sin necesidad de analizar que ocurrió con la pareja después de esa separación de hecho, hasta el año 2017 cuando introdujo una nueva exigencia, pues la Sala de Casación adujo que también debía probarse que la esposa efectivamente hizo parte de la familia del fallecido, y por esa razón su muerte le generó carencia económica, moral o afectiva. Se conoció tal exigencia como vínculo actuante, derruida años después.

Aquello se rememora sólo para ejemplificar la diversidad de criterios jurisprudenciales, que precisamente se forjaron ante la falta de claridad en la redacción de la norma.

No obstante, ello NO comporta la génesis de la negación. NO se trata del análisis de la norma, de establecer si al fondo únicamente le es dable analizar la ley que regula el derecho de manera exégeta, o si puede realizar un análisis más garantista propio de un juez o con apego a la jurisprudencia. Ello comporta un distractor, pues la verdadera razón por la cual Protección S.A. negó la pensión se cimentó en el análisis de las circunstancias fácticas del caso, NO encontró admisible la separación de la pareja por esa fuerza mayor, y ahí, justo ahí, es donde se torna reprochable la resolución que administrativamente le dio al caso Protección S.A.

Incluso en la misiva contentiva de la negativa expedida el 25 de marzo de 2014 en el trámite administrativo, nada se aduce, es decir, únicamente se indica aisladamente que no se probó el requisito de *vida marital con el causante por un lapso de tiempo no inferior a (sic) 2 años* y que en la investigación existían versiones contradictorias, ni quisiera se enlistan los motivos que en forma fundada llevaron a dicha entidad a adoptar tal determinación, ¿cómo podría entonces la Sala examinar si las razones de la negativa lo fueron con estricto apego a la ley?. He aquí un primer aspecto que impediría realizar tal análisis. Y es que no puede llegar a pensarse que al fondo le basta con decir que no se acreditó un requisito para que automáticamente se entienda que su postura obedece a lo que dice la ley, bajo tal intelección, todas las negativas se ajustarían

a derecho y no sería procedente imponer unos intereses por el retardo en el reconocimiento de una prestación, por ello es trascendental que la administradora explique por qué considera que a una persona no le asiste derecho a lo que reclama.

Pero si entendiéramos que los motivos de la entidad son los hallazgos de la investigación administrativa, a igual conclusión llegaría la Sala en torno a encontrar viable la imposición de los intereses moratorios deprecados toda vez que aquel documento, por sí mismo, conforme los argumentos que preceden, acreditaba el derecho en cabeza de la reclamante; es pues desafortunada la negativa del fondo, que ni siquiera coinciden con la realidad, tampoco se aprecian versiones contrapuestas de testigos, tampoco puede aducirse que sólo en el transcurso del proceso se esclareció el derecho en cabeza de la peticionaria, pues la prueba recaudada únicamente reiteró lo que ya reflejaba la investigación administrativa en la que incluso reposaba la declaración de la cuidadora, madre del causante, prueba que en su conjunto y con claridad, se insiste, evidenciaba que la razón por la que se dio la separación entre la demandante y el causante no es otra que la grave condición de salud en la que había caído aquel que ameritaban cuidados permanentes y especiales.

La actuación administrativa refleja que esa separación de cuerpos de los cónyuges fue motivada por una razón de fuerza mayor como lo era la enfermedad de cáncer de piel padecida por el afiliado. Incluso la totalidad de declaraciones (extra-juicio, recaudadas en la investigación y las recibidas en audiencia), corrobora de manera fehaciente que la cónyuge supérstite, aunque viviendo en una casa diferente al causante, le asistió durante su enfermedad durante 8 meses con ayuda de los hermanos, madre e hijos del cujus.

Aunado a ello, en gracia de discusión, NO puede la entidad tornarse sorprendida por aquella circunstancia, pues desde el año 2007 ya se forjaba un criterio consolidado al momento de la negativa (2014), según el cual la sola ausencia física de uno de los cónyuges no conlleva la pérdida del derecho, cuando ello ocurre por motivos justificables como la salud, entendiéndose que estos mantienen vivo y actuante su vínculo mediante el apoyo mutuo que se traduce en acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias. (Sentencia de radicación 30.141 M. P. Luis Javier Osorio López)

En este orden de ideas, se condenará a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo causado al momento del pago de la condena, los cuales deberá liquidar la entidad

demandada desde el **9 de septiembre de 2013**, es decir transcurridos 2 meses después de radicada la reclamación de la pensión de sobrevivientes (elevada el 8 de julio de la misma anualidad, fl.54), ya que tal es el plazo otorgado por la Ley 717 de 2001 para que la administradora de pensiones se pronuncie y resuelva el derecho, lo que no aconteció dado que sin respaldo legal negó el derecho a la actora, cuantificación que realizará teniendo en cuenta la tasa más alta a la fecha de pago de la obligación.

En consecuencia, se **REVOCARÁ** la decisión objeto del recurso de alzada y en su lugar se accederá a las súplicas incoadas en los términos ya anunciados. Al haberse concedido los intereses, deberá revocarse la indexación de la condena ordenada por el a quo a favor de DIONE CASTAÑEDA, dado que ambas figuras cumplen la misma finalidad resarcitoria.

No obstante, es procedente el reconocimiento de la **INDEXACIÓN** de las sumas adeudadas a título de acrecimiento a favor del menor ALEXÁNDER GÓMEZ SALAZAR, atendiendo que efectivamente este dinero no entró ni ha entrado a su patrimonio y que cuando lo haga, por efectos de inflación, el mismo estará envilecido o desvalorizado. Por ello, la entidad demandada deberá indexar el retroactivo de la pensión de sobrevivientes adeudado a este beneficiario al momento en que proceda a realizar el pago real y efectivo de la obligación atinente al acrecimiento, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, el índice inicial será el aludido IPC vigente a la fecha de causación de cada porcentaje de la mesada, y como índice final el IPC vigente al momento del pago. Aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital*. Tal y como lo ordenó el a quo. Y es que contrario a lo que en este punto plantea la apoderada de la AFP en el recurso de alzada, el hecho de que la mesada anualmente aumente, bien porque corresponda al salario mínimo o en atención al IPC, NO significa que el valor adeudado a una fecha por concepto de retroactivo, monetariamente mantenga su poder adquisitivo si se cancela una década después. Evidentemente se habrá visto envilecido.

En consecuencia, se **CONFIRMARÁ PARCIALMENTE** la decisión adoptada en primera instancia, por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han proferido en torno al tema, **REVOCÁNDOLA** únicamente en los aspectos antes aludidos. Se condenará en costas en esta instancia a Protección S.A. y a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de la demandante y a cargo de cada una de las entidades.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

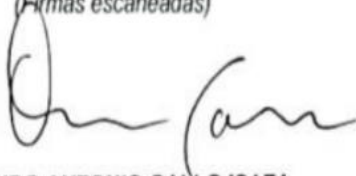
PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de abril de 2021 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.067.897, contra **PROTECCIÓN S.A.**, trámite al que fue llamado en garantía la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., e integrados en su condición de litis consortes a Juan Guillermo Gómez Márquez, Erika María Gómez Márquez y el menor Alexander Gómez Salazar representado por su madre Ruby Alexa Salazar Delgado, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: se **REVOCA** tanto la orden atinente a la indexación de las condenas impuesta a favor de la señora Dione Castañeda, como la absolución de los intereses deprecados y en su lugar se **CONDENA** a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar a la demandante los **INTERESES MORATORIOS** de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, lo cuales deberá cuantificar desde el día 9 de septiembre de 2013 y hasta la fecha efectiva del pago de la obligación, sobre el retroactivo causado, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. y la Compañía de Seguros Bolívar S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de la demandante y a cargo de cada una de dichas entidades.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN SENTENCIA
Demandante:	DIONE ELIZABETH CASTAÑEDA ALVAREZ
Demandada:	PROTECCIÓN S.A.
Llamado en garantía:	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Litis consortes:	JUAN GUILLERMO GÓMEZ MÁRQUEZ ERIKA MARÍA GÓMEZ MÁRQUEZ ALEXANDER GÓMEZ SALAZAR representado por su madre Ruby Alexa Salazar Delgado
Radicado No.:	05001-31-05-021-2014-00491-01
Decisión:	MODIFICA
Fecha de la sentencia:	03/05/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 04/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario